

¿Cuál es mi parte?



DIEGO CARVAJALINO
Profesor Inalde Business School

Nadie es ajeno a la situación del paro Nacional que vivimos desde el pasado 28 de abril. De una u otra manera nos hemos visto involucrados:

por imposibilidad de movilizarnos o por la dificultad para la adquisición de bienes o servicios o, simplemente, en la esfera anímica ante las discusiones con amigos y familiares sobre quién está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. No obstante, aunque esta situación nos afecta, pocas veces nos preguntamos, ¿cuál es mi parte?

Mal o bien, por más de 200 años hemos construido un país que nos pertenece y al que pertenecemos, bajo un modelo económico capitalista que a pesar de que tiene sus fallos, ha demostrado ser exitoso para alcanzar algún grado de desarrollo, minimizar los índices de pobreza y reducir de forma significativa la mortalidad infantil.

Hemos cometido muchos errores y a pesar de la violencia durante estos dos siglos, nos caracteriza nuestra hospitalidad, nuestro calor humano y nuestra capacidad para entablar amistades duraderas. En muy pocos países encontramos muestras tan sinceras de solidaridad y fraternidad como en

Colombia. El sufrimiento nos ha ayudado a concluir que lo que más importa son las relaciones humanas del aquí y el ahora. Aún nos queda mucho trabajo pendiente y tal vez nunca seamos un producto terminado. Pero esa construcción corresponde a cada uno de nosotros y no al gobierno de turno, ni a la oposición, ni a los periodistas, ni a los políticos en su conjunto.

En estos tiempos de protesta e inconformidad es necesario reflexionar: ¿qué estoy haciendo para que el país avance hacia una mayor paz social?

Las discusiones sobre si la protesta está infiltrada por intereses políticos, del narcotráfico, de indígenas con intereses diferentes, de jóvenes aburridos por la inequidad serían interminables. Sin embargo, no se puede negar que existe un alto porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza extrema y sin oportunidades para salir de esa situación. Es necesario que los gobiernos destinen recursos, que se obtienen de los impuestos a las personas con más ingresos, para dar oportunidades a la población más vulnerable.

Para ello, es necesario asegurar condiciones elementales de bienestar como una educación universal gratuita y de calidad, buena nutrición y acceso a la salud por parte de la población más vulnerable y, si es del

caso, ingresos que garanticen que los jóvenes no abandonen el colegio o la universidad para trabajar. Y aunque la equidad depende, en gran medida, de la acción del Gobierno, si como sociedad seguimos alimentando y arraigando prejuicios, no ayudaremos a propiciar y facilitar las oportunidades.

Nuestro sistema capitalista es bueno, pues premia el esfuerzo, pero tiene fallas que deben ser corregidas para garantizar que todas las personas, sin importar con cuánto dinero nazcan, tengan las mismas oportunidades. En eso consiste la paz social y así se logra vivir con mayor armonía y convivencia pacífica. No importa que algunos tengan mucho dinero y otros poco, mientras exista la posibilidad para que quien tenga poco pueda llegar a tener mucho.

¿Y qué puedo hacer yo? ¿Cuál es mi parte en la construcción de una sociedad con mayor movilidad social, que contribuya a generar más oportunidades para todos? Esa es la pregunta esencial para llegar a una reflexión que nos lleve a entender cómo asumimos nuestros compromisos frente a la sociedad y en nuestro propio entorno.

Cambiar la realidad que no nos gusta está en nuestras manos y el ejemplo es la mayor fuerza movilizadora que existe.

Lea completa en web

TRIBUNA PARLAMENTARIA

Estabilizar precios del GLP

Las dificultades para el sector del gas licuado de petróleo (GLP) o gas propano no cesan. Los fuertes efectos a nivel global derivados de la subida en los precios internacionales, la alta demanda, la elevada TRM, entre otros factores coyunturales, tienen en alerta a la industria nacional por el fuerte impacto que podría ocasionar el desproporcionado aumento de este combustible en el usuario final.

La excesiva volatilidad que vive la industria petrolera en el mundo quedó en evidencia la semana anterior, cuando pasó de tener una de las cotizaciones más altas de los últimos dos años y medio, a presentar una fuerte caída. Esa gran incertidumbre que ronda en el mercado nos exige minimizar la especulación de los precios internos del GLP, para no seguir sumándole mayores desventajas al energético en el país.

Ante un posible escenario de desabastecimiento de gas propano en el país, los representantes del sector han encendido las alarmas para que se establezcan nuevas medidas encaminadas a estabilizar el mercado local. Según la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), los precios inestables en los cilindros de gas registrados durante este año, han producido aumentos históricos de tarifas cercanas al 80% del productor al distribuidor.



JOSÉ DAVID NAME CARDOZO
Senador de la República

Al ser un mercado que atiende principalmente a usuarios residenciales (71%), de estratos 1 y 2, este insólito incremento amenaza con golpear la economía de millones de familias colombianas. La preocupación crece cuando encontramos que Ecopetrol, la petrolera encargada de atender 90% de la demanda interna en el país, a partir de agosto destinará parte de su GLP en autoconsumo para sustituir la nafta que usa en sus procesos. Una decisión con la que le da la espalda a los colombianos, desconociendo el impacto social que ocasionará en la población más vulnerable.

LOS PRECIOS INESTABLES EN LOS CILINDROS DE GAS HAN PRODUCIDO AUMENTOS HISTÓRICOS EN LAS TARIFAS

Una vez más el país queda expuesto ante la posición dominante que se le ha otorgado a Ecopetrol. Tener que recurrir a la importación con unos precios internacionales exorbitantes, afectaría a toda la cadena del GLP; distribuidores, comercializadores y usuarios, en quienes recaerían los nuevos costos. Que se disminuya la oferta nacional del combustible, en las actuales condiciones, va en contra del desarrollo de los colombianos y los objetivos de transición energética trazados por el Ejecutivo.

Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), para que proteja a los usuarios del sector residencial, comercial e industrial, a través de medias y estrategias con las que se les garantice la prestación continua, asequible y confiable de este servicio público. Establecer un máximo al precio de Ecopetrol es apremiante, la Creg debe acelerar la formulación de las reformas a la regulación vigente del GLP, para que se logre mitigar de manera oportuna el impacto de los altos precios.

Permitir que se afecte la oferta y demanda del gas licuado de petróleo a nivel nacional, sería lesivo en medio del proceso de recuperación económica en el que se conduce el país. Además de producir un gran golpe al bolsillo a los más 12 millones de colombianos que consumen a diario este combustible, comprar GLP en el exterior significaría un gran retroceso en el propósito del Gobierno de lograr la diversificación de la canasta energética. Esperamos que el Ejecutivo atienda oportunamente esta situación para evitar un nuevo malestar social.

Reducir el tamaño del Estado



RODOLFO CORREA
Secretario de Agricultura de Antioquia

La burocracia como modelo de administración pública fracasó, no solo en Colombia sino en el mundo entero.

Este modelo de administración burocrática fue propuesto por el filósofo Max Weber a inicios del siglo XX y sirvió de paradigma inspirador de todo el movimiento internacional de reforma administrativa de los años 50 y 60, basándose en la idea de que el manejo del Estado demanda unas reglas y una administración cuyo funcionamiento pueda calcularse con tanta exactitud como puede calcularse el rendimiento probable de una máquina. De aquí es donde nació la expresión "máquina burocrática".

A esta "máquina" se le asignan unas funciones y cada función requiere para su cumplimiento de un organismo que asume el proceso y cada parte del proceso tiene uno o varios funcionarios que se ocupan de cada etapa.

La evaluación de los funcionarios es positiva, portanto, si cumplen la parte del proceso que les corresponde, con independencia del resultado que de aquel se des-

prenda. Es decir, su labor es de medio y no de resultado.

Con esa lógica burocrática se estructuró la cultura de la administración pública en Colombia y aunque hemos tratado de incorporar a nuevas corrientes administrativas como la Gerencia Pública, lo cierto es que estamos todavía muy lejos de abandonar las viejas prácticas paquidémicas e ineficientes de un modelo administrativo que lleva más de 70 años dominando los despachos oficiales.

En esa línea, el Estado gasta literalmente billones de pesos sosteniendo una nómina y unos gastos de funcionamiento que ahogan el presupuesto de inversión y por tanto la satisfacción de las necesidades sociales que, realmente, son las que justifican la existencia de los Gobiernos.

En 2021, por ejemplo, el Presupuesto General de la Nación llegó a los \$313,9 billones. De este monto total, \$184,9 billones (59%) se destinaron a funcionamiento, mientras que al servicio de deuda se dirigieron \$70,5 billones (22,4%) y a la inversión \$58,5 billones (18,6%).

Solo en gastos de personal el presupuesto nacional destinó \$35,4 billones para cubrirlos. Una suma con la que, por ejemplo, podría hacerse una reforma agraria integral en Antioquia y

se podría recuperar la soberanía alimentaria del país.

Hoy Colombia cuenta con 1.268.423 servidores públicos. Distribuidos así:

- Rama Ejecutiva Nacional: 878.010
- Orden Territorial: 249.313
- Rama Judicial: 58.344
- Entes Autónomos: 53.876
- Órganos de Control: 22.411
- Organización Electoral: 3.728
- Sistema de Verdad, Justicia y Reparación: 1871
- Rama Legislativa: 870

A ojos de cualquier observador es evidente que el pareto 80-20 aplica perfectamente a esta realidad. Es decir, nadie podría negar que el 80% de los resultados que da el Estado los produce el 20% de su fuerza laboral.

Si queremos realizar una reforma estructural que permita que el Estado cumpla sustancial y realmente con su propósito es indispensable, pues, reducir su tamaño, para que los impuestos vayan donde se necesita y se comprenda de una vez que los problemas sociales no se resuelven lanzándoles billetes, sino construyendo soluciones estratégicamente planificadas que permitan incorporar a la mayoría de la población del país a las ventajas que ofrece el desarrollo económico.